

# **La izquierda electoral en el poder: valores y prácticas del Partido de la Revolución Democrática de México**

**Francisco Reveles Vázquez<sup>1</sup>**

## **Introducción**

A menudo se cuestiona si el Partido de la Revolución Democrática es de izquierda o no. Y muchos se responden que, en efecto, no representa a una fuerza de esa ideología política. Este supuesto sirve para desacreditar al partido y en muchos casos para reprocharle sus posiciones políticas, como principal representante de la izquierda electoral en México. Fácilmente caemos en el error de señalar lo que debería ser el PRD y no lo que es. En estas líneas definimos el perfil ideológico del partido tal como se ha expresado en los hechos, en lo que ha instrumentado en distintas gestiones de gobierno, principalmente en el Distrito Federal (hoy denominada oficialmente como Ciudad de México).

Aunque se dude, de 1989 a 2015 el PRD fue el principal partido de izquierda en nuestro país. En términos convencionales, la izquierda en México se dividía en dos tendencias, una moderada, legal, gradualista y electoral, y otra extremista, principista y antisistema. La primera estaba representada por el PRD y sus aliados, entonces los partidos minoritarios Partido del Trabajo (PT), y Movimiento Ciudadano (MC). A estas organizaciones se sumó el nuevo partido denominado Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) a partir de 2015, fruto de una escisión del PRD y con el liderazgo indiscutible de Andrés Manuel López Obrador. Si bien el PRI abraza principios de corte social demócrata y además tiene en su seno a las principales organizaciones de trabajadores del país, sus discursos y actos de gobierno desde 1988 lo ubican en el flanco ideológico de la derecha (del centro-derecha si se quiere), y no en el ala izquierda.

---

<sup>1</sup> Doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de tiempo completo del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Responsable del proyecto de investigación denominado: “Gobiernos y democracia en América Latina: en la búsqueda de la equidad social y la participación ciudadana”, que recibe el auspicio de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM. frevelesv@hotmail.com

Por otro lado, la izquierda extremista era representada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y otras organizaciones ilegales y violentas más pequeñas y de menor impacto político en el sistema (como el Ejército Popular Revolucionario y el Ejército Revolucionario del Pueblo Independiente), o bien organizaciones de corte anarquista que han surgido recientemente y que adquirieron visibilidad desde diciembre de 2012.

Es cierto que hay experiencia de gobiernos de la izquierda extremista (las Juntas de Buen Gobierno zapatistas en algunas regiones del estado de Chiapas). Pero las fuerzas más relevantes se han ubicado en el espacio electoral, en particular con el caso del PRD en la Ciudad de México. Desde 1997 este partido ganó la Jefatura de Gobierno, una mayoría relativa en el órgano legislativo local y, desde el año 2000, la mayoría de las dieciséis delegaciones políticas en las que se divide el territorio capitalino.

Los cuestionamientos van dirigidos hacia su tendencia a la adopción de posiciones moderadas, prácticas autoritarias y falta de congruencia de varios de sus gobernantes. Por otro lado, en un medio político como el que tenemos, donde la forma de gobierno democrática es endeble, no pocos de los usos perredistas más cuestionables suelen ser calificados como herencias del autoritarismo. Su reproducción a menudo permite llamar al PRD como “el nuevo PRI”, dando por descontado que el partido no representa una alternativa sino que “es más de lo mismo”. Su moderación cuestiona la validez de su oferta ideológica, principalmente en materia de política económica, en la cual en varias coyunturas parece distinguirse poco de las del resto de los integrantes del sistema de partidos.

Una primera puntualización que debe hacerse es que las críticas a los partidos dejan de lado la situación del régimen y de nuestro sistema político en general. Los partidos mexicanos han sido protagonistas fundamentales del cambio político. Más que ningún otro actor, fueron quienes empujaron las modificaciones al sistema electoral y sirvieron como medio de representación de los intereses de la sociedad a través de las elecciones. Y son los principales responsables del cambio político.

En este artículo primero ubicamos brevemente el debate sobre las ideologías en México. Después puntualizamos cuáles han sido las posiciones políticas más notorias de la izquierda representada por el PRD, en particular en el DF. Revisamos algunos de los elementos más importantes de la gestión gubernamental del perredismo en la capital del país. Aquí se señala no lo que el PRD debería ser si no lo que de hecho es: una izquierda electoral,

moderada, pragmática (a veces poco congruente, pero izquierda al fin) que en el DF impulsó la igualdad mediante transferencias económicas para los sectores sociales más vulnerables; fomentó derechos civiles y políticos y promovió una incipiente participación ciudadana en la toma de decisiones. Asimismo veremos cómo dejó asignaturas pendientes respecto del endeble sistema de impartición de justicia (incluyendo prácticas corruptas y para nada democráticas), la falta de transparencia en la toma de decisiones, la propagación del clientelismo y la carencia de herramientas sólidas para la rendición de cuentas.

### **La debilidad de las ideologías y del debate ideológico**

En su formación, el PRD se ubicó como el principal partido de izquierda en el flanco opositor, ocupándolo hasta 1993 de manera preponderante. En efecto hubo más partidos en dicho espacio, pero ninguno con su fuerza electoral. La aceptación de la ruta electoral para el cambio político no fue difícil para los perredistas. Esa había sido la opción de las corrientes de izquierda desde finales de los setenta. En realidad fue cuestionada por los sectores de izquierda más radicales (mucho más pequeños, sin presencia entre la sociedad ni impacto en los medios o en el parlamento). Incluso hubo una tendencia que pugnaba por hacerlo más un partido movimiento que un partido electoral. (Bolívar, 2005: 106)

Pero de 1989 a 1993 estos sectores de fuera y de dentro de la organización cedieron terreno, tanto por el ascenso electoral del perredismo como por la caída del socialismo real. En 1994, la aparición de una opción extremista que casi de inmediato tuvo un respaldo social significativo (de opinión, mas no de militancia) y espacio en medios de comunicación (por cierto más abiertos producto del cambio político) menguó la fuerza del PRD, pero al mismo tiempo lo forzó a asumir una identidad electoral más pronunciada.

La conquista de cargos públicos de la mayor importancia a partir de 1997 fue un factor que impactó la dinámica del perredismo, haciéndolo más moderado en el plano económico. Poco a poco su líder principal y sus cuadros gobernantes aceptaron las políticas macroeconómicas y se vincularon armónicamente con el gobierno federal en turno. El ejercicio de gobierno hizo del PRD un partido más moderado en el plano ideológico. Huelga decir que se volvió pragmático, pues su relación con el gobierno federal o con gobiernos estatales de diferente signo (panista o priísta) se basaba no en una afinidad ideológica sino

en una necesidad técnica: la relación resultaba indispensable y conveniente. Por lo tanto, era pragmática y no ideológica.

El ascenso del PRD a la Jefatura de Gobierno del DF en 1997 consolidó a su máximo líder (Cuauhtémoc Cárdenas), dio incentivos para la cohesión y fortalecimiento de su coalición dirigente y para sus corrientes, y moderó a los grupos y liderazgos más extremistas dentro del partido. Al mismo tiempo esto debilitó todavía más el debate ideológico, pues los dirigentes se dedicaron a diversas tareas en las oficinas públicas o en el legislativo, dejando al partido una función de máquina electoral y de base social (y clientelar) de apoyo para los gobernantes.

El año 2006 resultó provechoso para el PRD pues realizó una campaña electoral con el ex Jefe del Gobierno del DF, López Obrador, un candidato con amplio respaldo popular. La agenda de debate en las campañas fue decidida por el abanderado perredista, quien ya contaba con espacio en medios (en parte por méritos propios y en parte como producto de la misma apertura mediática). Más aun, esta primera elección presidencial después de la alternancia en el año 2000 fue la primera oportunidad de debatir ya no sobre la dicotomía autoritarismo-democracia sino en torno a otro eje de discusión, que fue el de la pobreza. En realidad fue López Obrador quien fijó dicho tema como elemento fundamental de su propuesta, al grado que sus contrincantes pronto debieron precisar sus posiciones en torno a dicho asunto. La campaña fue sobredimensionada, pues se tachó al candidato como populista, como un peligro por sus propuestas de política económica y por su proclividad a pasar por alto la ley. Pese a todo, la oferta del 2006 distó mucho de ser una propuesta radical.

Es necesario recalcar que en el 2006 el perredismo y sus aliados fueron quienes determinaron la agenda del debate. A tal grado que el nuevo gobierno panista, ávido de legitimidad y buscando menguar el respaldo social ganado por el perredismo, dictó medidas para supuestamente combatir la desigualdad (cuando en realidad no había sido el centro de su oferta electoral).

Mención aparte merece aquí el uso de mecanismos de democracia directa al interior del partido, principalmente para la selección de dirigentes y selección de candidatos a cargos de elección popular. De entre todos los partidos, el PRD cuenta con los estatutos más democráticos, aunque también es el que más conflictos enfrenta a la hora de aplicarlos. El problema es que su resolución suele pasar por alto las normas, predominando la negociación

entre las corrientes (Martínez, 2004: 108) y abriendo espacios para prácticas no necesariamente antidemocráticas pero cuestionadoras de su esencia participativa.

En su relación con organizaciones sociales, movimientos, sindicatos o partidos, el PRD ha adoptado prácticas clientelares que se suelen citar cuando se rechaza su adscripción de izquierda (Tejera, 2015 y 2016). Sin embargo, lo relevante sería evaluar si los beneficios de la vinculación entre el partido y la organización son recíprocos. No debe olvidarse que la satisfacción de los intereses sociales es una de las tareas de los partidos en el gobierno. Y ello se concreta, en gran medida, a partir de su relación con las fuerzas sociales que manifiestan sus demandas.

### **Los temas fundamentales del ideario perredista**

Como se sabe, la mayoría de los partidos en el mundo son electorales o, dicho en términos de Panebianco, profesionales-electorales. Es decir, son partidos con una estructura limitada, con vínculos flexibles con la sociedad, con posiciones ideológicas difusas y propicias para atraer el respaldo de amplios sectores sociales, dependientes del financiamiento público del estado, con el predominio de los expertos o profesionales de la política en su interior y con una importante presencia de los gobernantes en su toma de decisiones.

De todo lo anterior lo que interesa destacar en este trabajo es la difusa ideología de los partidos y, en consonancia con esta característica, la poca atención que recibe la formulación o actualización de las banderas ideológicas partidistas. Vale decir que esto es fenómeno común en muchos partidos en el mundo.

En el caso del PRD, la endeble identidad ideológica es consecuencia en parte de la multiplicidad de fuerzas que lo integran (ex priístas, ex partidos “paraestatales” y ex militantes de diversas corrientes ideológicas socialistas o comunistas) (Vivero, 2006: 290). Un elemento adicional está constituido por la orfandad en que quedaron estas fuerzas producto del derrumbe del socialismo real y por la hegemonía de la derecha neoliberal en todo el mundo en la década de los ochenta. La orientación electoral del PRD, o dicho en otras palabras, la orientación electoral de la mayoría de las fuerzas de la izquierda mexicana, se inscribe en un movimiento de la izquierda a nivel mundial. En relación con la socialdemocracia, Adam Przeworski lo había dicho desde hacía tiempo (Przeworski, 1988:

22-23). De manera que la opción electoral no es una transgresión de los principios de la izquierda, sino una orientación hasta cierto punto natural en el momento histórico que vivimos.

Los gobiernos que impusieron políticas de corte neoliberal desde principios de los ochenta expresaron un cambio en el modo de acumulación capitalista. Esas políticas se generalizaron en muchas partes del mundo, gracias sobre todo a los organismos financieros internacionales, que fueron progresivamente más influyentes en la medida en que los países con mayores problemas requirieron de recursos para solventarlos. Las nuevas democracias provenientes del totalitarismo o del autoritarismo fueron clientes predilectos de estos organismos. Con ello se aseguró la transformación económica en el largo plazo.

Esta situación produjo un caldo de cultivo para el ascenso al poder de partidos de derecha. Tanto el predominio de estas fuerzas como la globalización de las políticas de corte neoliberal dieron materia para decretar el fin de las ideologías. El pensamiento único trató de imponerse, teniendo como fundamento al neoliberalismo y al neoconservadurismo. Sin embargo, el advenimiento de nuevas crisis económicas en el concierto internacional, así como el ascenso al poder de fuerzas políticas de izquierda desprestigió esta perspectiva que pretendía imponerse. Además, para muchas corrientes de izquierda, la democracia se constituyó como el nuevo objetivo fundamental a conseguir, sobre todo en los países antaño con regímenes totalitarios o autoritarios.

Después de sus primeros triunfos entre 1997 y 2000 (en particular la conquista del gobierno de la capital del país y de algunas entidades de la República Mexicana), el debate ideológico en el perredismo mexicano, de suyo limitado, fue relegado, primero por la lógica electoral que vivió entre 2001 y 2003, con motivo de las elecciones federales intermedias, y después por los videoescándalos y la tentativa de desplazamiento del jefe de gobierno a través de su desafuero. Ambos acontecimientos pusieron en duda la honestidad de López Obrador y de varios de sus principales colaboradores, así como su falta de respeto a la ley. Además acreditaron los problemas de su liderazgo: su carácter obcecado, su intolerancia a la disidencia (incluso de su propio partido) y su control personal de la toma de decisiones en su gobierno y en el PRD.

Pese a todo, el perredismo encontró un nuevo líder (ya la estrella de Cárdenas se había apagado desde el 2000) y nuevas banderas que le brindaron mayor respaldo de la sociedad.

Si bien todo esto ocurría en la capital del país, los medios se encargaron de darle resonancia nacional. El triunfo político de López Obrador y el PRD al derrotar la tentativa de su eliminación política de la sucesión presidencial lo colocó en la mejor posición en la carrera rumbo al 2006.

Al principio de su campaña presidencial el ex jefe de gobierno del DF se expresó a favor de un modelo de estado de bienestar. La enorme pobreza existente era concebida por López Obrador como resultado del “mal gobierno” (no como producto del sistema económico imperante). A la larga, presionado por los medios y los sectores productivos nacionales internacionales, manifestó que al neoliberalismo era necesario refuncionalizarlo para satisfacer los intereses de los más necesitados. Planteó que respetaría la autonomía del Banco de México (institución garante del buen funcionamiento de la economía del país y de orientación enteramente neoliberal). Pese a todo, sus roces con un importante sector de los empresarios fueron evidentes durante la campaña. En ciertas materias el abanderado presidencial no hizo sino reiterar los postulados de su partido. Una propuesta atractiva porque implicaba una genuina rendición de cuentas era la posibilidad de revocación de su mandato mediante referéndum a mitad de sexenio.

Las políticas populistas fueron la punta de lanza de la campaña, pero también el blanco perfecto para los ataques de sus adversarios. Sus detractores le cuestionaban cómo sostendría las políticas sociales sin más recursos provenientes del fisco o de la privatización de las últimas empresas del estado, y también con las cargas presupuestarias inmensas de las pensiones o del sistema nacional de salud (IMSS e ISSSTE). La solución se concretaba en un trío de propuestas: la austeridad en cuanto a los salarios y los gastos de la burocracia en general; el combate a la corrupción en todas las oficinas gubernamentales; una recaudación fiscal sencilla y eficaz. De estas políticas se obtendrían, supuestamente, cuantiosos recursos útiles para solventar los gastos del gobierno.

La inversión gubernamental se canalizaría a infraestructura, construcción de viviendas y obras públicas en general. En esta dimensión es donde el abanderado replicó las políticas sociales instrumentadas en su gobierno.

Si volteamos a ver a la izquierda de otros países latinoamericanos encontramos dos similitudes: la falta de un proyecto global de cambio por parte del PRD y al mismo tiempo

una preocupación y atención dirigidas hacia los sectores más pobres. Como señalan Rodríguez y Barrett,

“...En lugar de un destino fijo (el posneoliberalismo, el socialismo, etc.) un criterio analítico más útil consiste en determinar hasta qué punto dichas iniciativas económicas van en la dirección de valores económicos ampliamente reconocidos por la propia izquierda, como la disminución de la desigualdad entre clases y entre países, la democracia económica y la sostenibilidad ambiental.” (Rodríguez y Barrett, 2006: 44).

El candidato presidencial, su partido y sus aliados (los partidos minoritarios Convergencia y Partido del Trabajo) representaron una opción de izquierda moderada, centrista y pragmática. Sin proyecto global pero con ciertas posiciones reivindicadoras de un estado con responsabilidad social, a diferencia del postulado por el neoliberalismo y el neoconservadurismo panistas. Los principios de las fuerzas de izquierda estaban reconstruyéndose, dando nuevos contenidos a la socialdemocracia o el socialismo.

Los detractores de López Obrador se sintieron hasta cierto punto satisfechos con la moderación experimentada por López Obrador en la contienda electoral por la presidencia de la República en el 2012. Candidato por segunda ocasión de las izquierdas (PRD, PT y MC), Andrés Manuel López Obrador varió de manera notoria su discurso y sus prácticas en el 2012. En efecto, después de haber sostenido su discurso a favor de los pobres en el 2006, pasó a pronunciarse (por lo menos al principio de la campaña) por lo que denominó como “república amorosa”. En paralelo, sus acciones de campaña lo mostraron como un líder tolerante al resto de las fuerzas políticas, sin la agudeza crítica de antaño y declarando de entrada sus compromisos con el modelo de desarrollo y con las normas del régimen político. Fue sorprendente que el candidato de las izquierdas no recuperara ni reiterara sus propuestas de política social, que en realidad eran acciones de gobierno en el DF, en otros estados y en varios municipios o delegaciones políticas. Después de años de cuestionamientos a las políticas “populistas” de parte de panistas y priístas (en el gobierno federal, en el Banco de México o en el Poder Legislativo), el programa social de las izquierdas había sido abrazado por priístas y panistas en diversos gobiernos (federales y locales). López Obrador no hizo énfasis en esta ventaja frente a sus contrincantes; o por lo menos los medios no destacaron su genuina preocupación por el bienestar social mediante la instrumentación de este tipo de



políticas. Sus propuestas de política social no fueron novedosas, puesto que en su caso hablaba más su gestión de gobierno que cualquier discurso o plataforma.

La coalición electoral de las izquierdas manejó un amplio conjunto de propuestas sobre derechos sociales y políticos en pro de la equidad social, la igualdad de género, de respeto a los derechos humanos y en favor de los intereses de mujeres, jóvenes, niños y discapacitados. Una temática de interés fue la de fomentar la participación ciudadana en todas sus formas. En la plataforma de la coalición se podía leer lo siguiente:

“consulta ciudadana; rendición de cuentas; auditoría social; iniciativa popular; afirmativa ficta; revocación de mandato; referéndum; plebiscito; la iniciativa de inconstitucionalidad ciudadana, audiencia pública, cabildo a sesión abierta, presupuestos públicos participativos; derecho a voz ciudadana; y acción popular.”.

Se planteó que la participación ciudadana podría estar en la formulación e instrumentación de las políticas de gobierno, así como en la elección de funcionarios públicos de todos los niveles, incluyendo a los titulares de la Suprema Corte de Justicia o de los órganos autónomos). Si bien no hubo mayor concreción, la propuesta destacó porque también en la gestión de gobierno del perredismo (al menos en el DF) se ha impulsado el “presupuesto participativo” para definir el gasto de una parte del presupuesto gubernamental. Pero al mismo tiempo llamaba la atención que no se colocara en relieve, por encima del resto de las propuestas. Es probable que no hubiera convicción al respecto de parte del candidato y de los líderes de las izquierdas y que simplemente haya sido una posición para mantener contentas a sus bases. En todo caso, el abanderado presidencial tampoco se desvivió por destacarla, cuando habría sido también una propuesta cualitativamente distinta a las de sus adversarios.

### **Las políticas del gobierno del PRD en la Ciudad de México**

El perredismo se adscribió en los hechos a las corrientes ideológicas socialdemócratas que se estaban reconstituyendo ante la caída del principal paradigma de la izquierda (el socialismo real). Lo hizo sin un debate sólido de por medio, carente de cuadros intelectuales fuertes e influyentes, y llevado inercialmente por la simple conversión de sus ideas en acciones de gobierno. Las políticas de un nuevo modelo de estado de bienestar fueron

fraguando sin un bagaje ideológico consistente y en manos exclusivamente de los principales líderes del partido. Cuauhtémoc Cárdenas presumió sobre todo su papel como líder del primer gobierno democrático de la ciudad; Andrés Manuel López Obrador emitió un discurso populista apreciado por importantes sectores sociales más allá del centro del país; y Marcelo Ebrard prefirió hablar de un gobierno de izquierda progresista. En la misma línea se auto identificó Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno en el periodo 2012-2018.

A partir del análisis de la calidad de la democracia de estos gobiernos (recuperando la agenda de investigación propuesta por Leonardo Morlino (2004), los rasgos distintivos son la preeminencia que se le dio a los principios de igualdad y libertad. Hubo avances en la rendición de cuentas y en la capacidad de responder a demandas sociales, pero casi nada en el fortalecimiento del estado de derecho (Autor, 2016).

La hegemonía electoral alcanzada por el partido en el gobierno no se complementó con más participación ciudadana, lo que repercutió en las diferentes esferas del ejercicio del poder. A lo largo de más de 18 años (de 1997 a la fecha) ha habido una incipiente intervención social en la toma de decisiones, en la instrumentación de políticas, en su evaluación y en la rendición de cuentas. Las organizaciones sociales tienen más influencia que en el pasado, incluso con cargos públicos en su poder y han recibido apoyos de la mayor relevancia (incluyendo financiamiento para proyectos), y también han contribuido en la definición de contenidos de algunas de las políticas públicas. Pero la ciudadanía no ha tenido las mismas oportunidades.

Aunque cuestionada por la oposición, con frecuencia la mayoría perredista en la Asamblea Legislativa del DF se impuso para ir formulando leyes o creando y reformando instituciones de la mayor relevancia. Muchas de ellas de carácter ordinario, sin impacto en el desempeño gubernamental o en el desarrollo de la forma de gobierno democrática, en otras palabras, normas que sencillamente eran indispensables para los nuevos tiempos, como las referentes al funcionamiento de las dependencias gubernamentales o de los órganos legislativo y judicial. Hubo más novedades en la creación de órganos autónomos garantes de derechos y principalmente en la elaboración de legislación sobre derechos sociales y políticos de nuevo cuño.

La debilidad del estado de derecho se notó en el tema de la impartición de justicia. Uno de los primeros problemas que la nueva administración debió enfrentar fue el de la

inseguridad pública. Las cifras crecientes de delitos de todo tipo eran motivo de preocupación para propios y extraños. Los gobiernos priístas se desentendieron y simplemente dejaron crecer a la delincuencia, probablemente conscientes de que ya no les tocaría enfrentarla a partir de 97 (Calvillo y otros, 2002). El gobierno atendió el problema con muchos recursos, que rindieron frutos en un plazo relativamente corto. Sin embargo, las nuevas estrategias no estuvieron exentas de viejas prácticas ilegales, como el soborno o la tortura. Más aun, la reducción de los delitos fue desigual, por lo que el secuestro siguió siendo motivo de preocupación para mucha gente. La corrupción es un cáncer que afecta a muchas dependencias gubernamentales, principalmente las relacionadas con la seguridad pública y las finanzas. El trato desigual a los ciudadanos por parte del sistema de justicia es por todos conocido. Eso no varió a lo largo de estos años de gobiernos democráticos.

Es contradictorio que en medio de este precario sistema legal, los derechos políticos y sociales se hayan fortalecido en las gestiones perredistas a lo largo de 15 años. En efecto, las libertades tradicionales fueron generalmente respetadas, por lo que, de suyo un espacio propicio para la libre manifestación de las ideas y de la acción política disidente, el DF se erigió en el principal defensor de tales derechos. Curiosamente, no pocas de las organizaciones antaño movilizadas abandonaron su activismo al tener enfrente a un gobierno más dispuesto a la negociación (Bruhn, 2013). Incluso varios de sus líderes participaron en la toma de decisiones, fuese en el órgano ejecutivo o en el legislativo (además de las jefaturas delegacionales). Y al haber más espacios para las organizaciones sociales en la formulación y evaluación de políticas en consejos consultivos o en los comités o asambleas vecinales, no pocas de las organizaciones se desmovilizaron y construyeron una relación de beneficio mutuo con el gobierno.

Esto afectó positivamente la formulación de normatividad que procura y defiende las libertades en general. La ampliación de derechos fue una realidad, en particular para sectores sociales ignorados en el pasado reciente, como los adultos mayores, los discapacitados, las mujeres, los niños, los jóvenes y los integrantes de la diversidad sexual. Aunque algunas de las normas no fueron realmente contundentes ni novedosas (como en el caso de la ley dirigida a los jóvenes), las libertades se ampliaron significativamente respecto de la comunidad homosexual y de las mujeres.

La excepción a esta tendencia en pro de la libertad fue la restricción a la creación de nuevos partidos locales y a la falta de reconocimiento y, por tanto, de atención a los integrantes de la grey católica capitalina. Los empresarios tuvieron libertad para participar políticamente, aunque no demandaron formas institucionales para ello. Y los medios de comunicación (que en realidad son los mismos que predominan en el plano nacional) ejercieron plena libertad de expresión aun en contra de los gobernantes capitalinos (lo que sin duda practicaron ampliamente en la sucesión presidencial de 2006).

La igualdad fue una prioridad para el perredismo en el poder. Pese a las restricciones presupuestales, el manejo de la economía capitalina siguió las directrices institucionales para no caer en déficit, ni en conflictos con el gobierno federal o con la iniciativa privada. La política de austeridad, la eficacia en el cobro de impuestos y el control de la deuda pública fueron todos elementos que permitieron un desempeño gubernamental eficaz en el ámbito económico. Sin negar la complejidad de las negociaciones con el gobierno federal y momentos de aguda confrontación, amplios recursos fluyeron a las arcas capitalinas, lo que facilitó el desarrollo de políticas sociales con tendencia universal.

Las políticas sociales fueron punta de lanza del gobierno, en detrimento de la inversión pública en proyectos de largo plazo. A partir de la reorientación de los recursos del erario hacia acciones con orientación universalista, hubo mejoras significativas en educación y vivienda, pero no en salud o en empleo. Los déficits no son del todo atribuibles al gobierno local, por lo que la evaluación debe ser ponderada. Los grupos vulnerables fueron ampliamente beneficiados, como se aprecia en las medidas tomadas a favor de adultos mayores, discapacitados, mujeres y niños. En conjunto, aunque la economía capitalina depende de la nacional, su orientación en pro de la igualdad es indudable, como se aprecia en el listado siguiente de programas sociales:

Los resultados de estas acciones no han sido del todo positivos en cuanto al combate a la pobreza y principalmente a la desigualdad social: de 2008 a 2012 casi cien mil personas se empobrecieron, lo que representó una tasa anual de 4% (la del país fue de 7.2%). Casi 29 mil pasaron a condiciones de extrema pobreza, lo que significó una tasa de 15.30%, cuando a nivel nacional hubo un decremento del 12.20%. De acuerdo con Ziccardi, Vázquez y Mier:

“La población en pobreza o con algún tipo de vulnerabilidad (personas que tienen alguna carencia social como educación, salud, seguridad social, vivienda y

alimentación) representaba 37.4 por ciento de la población, es decir 3.29 millones de personas. La población vulnerable por ingreso alcanza 4.7% (0.41 millones). Mientras que en situación de pobreza moderada se encuentra 25.7% de la población(2.26 millones), y en pobreza extrema 2.1% de la población(0.19 millones). (Ziccardi, Vázquez y Mier, 2012: 696-697).

El comportamiento de la economía capitalina pone en cuestión las limitaciones del sistema de transferencias y la necesidad de una amplia inversión pública en obras de infraestructura que fortalezcan y amplíen los servicios a cargo del gobierno y que mejoren las condiciones de vida de todos los capitalinos. De ese modo la igualdad podría ser más efectiva y más extensa entre la población. Y los promotores del clientelismo perderían, al menos en parte, su razón de ser.

La relación de los jefes perredistas con los gobernantes federales fue armónica la mayor parte del tiempo. Los temas de discordia fueron por lo general las finanzas y la seguridad pública. En ciertas coyunturas la confrontación fue real, básicamente por recortes al presupuesto; pero ninguna escaló como en el caso del presidente Vicente Fox contra López Obrador. El gobierno federal y el PAN tuvieron la intención de eliminar políticamente al Jefe de Gobierno de la contienda por la presidencia de la República en 2006. López Obrador construyó su candidatura con base en un discurso populista, un conjunto de políticas sociales amplias y un adecuado uso de su imagen en medios de comunicación. Lo que alentó al panismo y a sus aliados en su contra fue su vena populista y su liderazgo personalista. Estas características, desde su perspectiva, ponían en riesgo el modelo económico y el régimen político democrático.

Los partidos confeccionaron en realidad relaciones simples con los gobiernos a partir de 1997. El PRD se comportó como partido gobernante, subordinándose a las directrices de los jefes de gobierno. En paralelo, líderes, corrientes y organizaciones sociales construyeron una estructura partidista adecuada a sus objetivos, alimentándose legal e ilegalmente con recursos del erario. Asimismo las políticas sociales les dieron un capital político indiscutible, que explotaron al máximo con la generación y reproducción de clientelas electorales por doquier.

Por su parte, ni el PAN, el PRI o el resto de los partidos tuvieron oportunidad de hacer contrapeso ni de erigirse en referentes válidos para la sociedad capitalina. El panismo fue

generalmente la voz más crítica en la asamblea legislativa, pero no tuvo posibilidad real de incidencia en la toma de decisiones. Mucho menos la tendría el PRI con los pocos legisladores que alcanzó a llevar a la asamblea a lo largo de estos quince años. Los partidos minoritarios fueron poco más que una presencia testimonial en el legislativo. Sin bases sociales, tampoco pudieron incidir.

La relación entre el gobierno y órganos autónomos fue esencial en el derrotero del régimen político. Emulando leyes e instituciones nacionales, el DF estrenó o reconstituyó instituciones en materia de defensa de derechos humanos, acceso a la información, equidad de género, discapacitados y contra la discriminación. Asimismo contó con autoridades electorales que cumplieron o trataron de cumplir con sus funciones en forma imparcial y autónoma.

Todas estas instituciones fueron cobijadas por un marco legal básico que les ha permitido cumplir con sus funciones casi siempre de manera limitada. En parte por debilidades institucionales, falta de presupuesto o bien por factores estructurales vinculados con el endeble estado de derecho y también con el desconocimiento de los ciudadanos al respecto. De suerte que si bien hay un notable crecimiento de quejas y de recomendaciones de la comisión del DF en torno a derechos humanos, las respuestas gubernamentales son endebles, lentas y poco contundentes (en no pocas ocasiones por las más importantes dependencias del sector público). El cada vez mayor acceso a la información no se ha traducido en rendición de cuentas (donde esté de por medio la posibilidad de sanción). Y la autoridad de los órganos electorales es socavada constantemente mediante restricciones presupuestales y el manejo irregular de las normas para modificar su composición.

La sociedad tiene poco espacios para la rendición de cuentas. Las movilizaciones sociales cambiaron de lógica con el ascenso del PRD al poder. Por una parte, las organizaciones sociales afines al PRI, marcadamente en el caso de las organizaciones sindicales, fueron agresivas con el nuevo gobierno, a diferencia del trato terso concedido a los gobernantes priístas en el pasado inmediato. Por el contrario, las organizaciones sindicales independientes y las organizaciones sociales en general redujeron notablemente su activismo desde 1997. Este comportamiento se explica por diversas razones, como la inserción de líderes a la élite política, las transferencias económicas directas para amplios sectores sociales y la lógica clientelar de las organizaciones sociales.

La rendición de cuentas se relaciona con la capacidad del gobierno para responder a las demandas de la sociedad. Con el nuevo gobierno en 1997 se esperaba una mayor cercanía con la gente, tanto por su origen como por la vocación ideológica de sus representantes. De hecho había un marco legal propicio para involucrar a los ciudadanos en la formulación de políticas. Y en adición estaba el compromiso de los nuevos funcionarios de fomentar la participación ciudadana a toda costa.

Las figuras institucionales de participación ciudadana proliferaron en las gestiones perredistas, pero su impacto fue generalmente endeble. Al comienzo parecía que dicha participación sería el sello distintivo de los nuevos gobernantes. Las consultas populares, los comités y asambleas vecinales, los presupuestos participativos se practicaron en el espacio capitalino como nunca antes. El perredismo fue pionero en la puesta en funcionamiento del presupuesto participativo. Pero pronto los mecanismos de democracia directa se pervirtieron. Los resultados de estos ejercicios de participación no fueron vinculantes, sus promotores adolecieron de convicción ideológica y no convocaron a una nutrida participación de la ciudadanía. A ello contribuyó que las decisiones fundamentales no estuvieran en juego: las materias puestas a consulta en realidad carecían de repercusiones importantes en la vida cotidiana de los ciudadanos. Y la mayoría de ellos optó por mantener su respaldo al gobierno en el ámbito electoral o bien en movilizaciones amplias en pro de beneficios individuales y concretos.

Fuera de estas formas institucionales de participación hubo actores sociales o políticos que reaccionaron a decisiones de los gobiernos, oponiendo resistencia o estableciendo una línea política cualitativamente diferente. Actores políticos como el EZLN o el CGH de la UNAM se enfrentaron con el gobierno o con sus representantes en coyunturas cruciales de la vida política local (y nacional). El movimiento estudiantil colocó entre sus enemigos al PRD y al gobierno capitalino en 1999. Los zapatistas, después de una relación armónica y paralela, se enfrascaron en una disputa con el PRD y sus aliados por el espacio político de la izquierda. López Obrador fue blanco de sus críticas en 2006, contribuyendo a su caída electoral.

Otros actores disidentes provinieron de la sociedad civil, de organizaciones emparentadas con intereses de la iniciativa privada o con posturas conservadoras, que no vieron con buenos ojos al cardenismo, al populismo o a la tolerancia de la diversidad sexual

y el apoyo a los movimientos feministas. Escudados a menudo de una legítima bandera en pro de mayor seguridad pública, estos grupos también colaboraron en la derrota del perredismo en 2006. Sus esfuerzos resultaron infructuosos para desbancar al PRD de la capital. Pero fueron actores que ocasionalmente expresaron su malestar por varias decisiones de gobierno.

Un actor muy activo a lo largo del periodo fue la iglesia católica. Coincidente con posturas del sector privado, los representantes católicos practicaron diversas formas de resistencia y oposición ante las reformas legislativas que dieron lugar al reconocimiento de los derechos la mujer y de integrantes de la diversidad sexual. Sus intentos fueron frustrados por su falta de penetración política en amplios sectores de la sociedad y por el simple hecho de que el PRD y sus aliados sumaron las mayorías necesarias para mantener firmes sus decisiones legislativas y de gobierno.

Es necesario señalar el conservadurismo del López Obrador sobre estos temas, frente a los cuales siempre se expresó de manera ambigua. Adicionalmente cabe recordar su ensalzamiento de la honestidad y del buen comportamiento en general de los funcionarios públicos como garantía de un gobierno democrático y comprometido con los pobres. Estos posicionamientos no se plasmaron en los principios del partido ni en las plataformas electorales. Asimismo la mayoría de los perredistas no los replicaron en sus discursos de campaña o como gobernantes, más allá de declaraciones políticamente correctas en pro de la legalidad.

Además de estas expresiones de la sociedad, hubo también algunas nuevas movilizaciones de resistencia, como en el caso de las obras públicas más importantes, como los segundos pisos del periférico, las líneas del metro y el metrobús y la vialidad llamada supervía poniente. En éste último caso sobre todo la medida gubernamental generó una oposición social que tuvo que ser acallada mediante la represión. La oposición social a la obra fue ignorada con escasa pericia gubernamental y con el concurso de las fuerzas encargadas del orden público. Siendo una excepción, el hecho no deja de ser preocupante por la exhibición de la incapacidad de los gobernantes para ganar la aceptación social para el cumplimiento de sus tareas.

El ejercicio de gobierno del PRD en el DF de 1997 a 2012 se distingue entonces por seguir los principios de igualdad y libertad de manera pronunciada. Los avances en estas



materias son indiscutibles, principalmente en lo que se refiere a políticas sociales. Si la rendición de cuentas vertical fue ampliamente favorable, no sucedió lo mismo con la horizontal (hecha por instituciones del mismo nivel o bien frente a los del nivel superior). Aun con un marco legal y financiero con restricciones, el gobierno capitalino desarrolló un conjunto de políticas cualitativamente distintas a las del gobierno nacional y a las de otros gobiernos locales. Para ello contó con el apoyo del órgano legislativo (con mayoría de su partido) y con un órgano judicial funcional y para nada contrario a sus políticas. Los partidos de oposición tuvieron escaso margen de maniobra, sus posturas fueron reactivas y carecieron de impacto en la sociedad.

En la capital del país, los avances en cuanto a la ampliación de la igualdad y el fortalecimiento de libertades son notables. Lo mismo pasa con la persistencia de un endeble estado de derecho, la escasa rendición de cuentas y una incipiente participación ciudadana en la toma de decisiones.

## **Conclusiones**

El PRD es un partido de izquierda moderado, pragmático, con un liderazgo personalista y un perfil ideológico populista en los últimos años. Acepta las reglas del capitalismo como sistema económico, de la misma manera en que reconoce las normas de la democracia representativa. Desde su punto de vista, indiscutiblemente el estado debe mantener su función social. Si bien acepta las políticas macroeconómicas de corte neoliberal, sus políticas sociales se alejan de las de focalización y tienden a la universalización. Está convencido de la necesidad de enfrentar la pobreza, más que de mantener unas finanzas sanas. Es un fuerte defensor de la soberanía, lo que no le impide reconocer la posibilidad de participación de empresarios nacionales en el desarrollo. Y para obtener los recursos necesarios para las políticas sociales piensa que es suficiente con establecer una política fiscal eficaz no persecutoria, y con eliminar cualquier posibilidad de corrupción en el aparato gubernamental. En el terreno político, es partidario del Poder Ejecutivo fuerte, aunque también se ha manifestado a favor de incrementar las atribuciones del Poder Legislativo. Pugna por gobernantes más honestos y respetables. Acata las reglas del sistema electoral vigente y pese a todo siempre ha asumido los cargos que ha ganado en las urnas. De vez en cuando

desobedece leyes que considera injustas. Sus liderazgos personalistas generan una centralización en la toma de decisiones que parece sustentar su postura a favor del presidencialismo. Es simpatizante de la ampliación de la participación política de los ciudadanos, así como de la instauración de mecanismos de rendición de cuentas (aunque no tanto de un sistema de sanciones). En temas escabrosos, como la reforma laboral, ha sido cauto y prefiere ponerlos a referendo a toda la población.

Tanto las propuestas en materia petrolera, como en cuanto a los métodos de toma de decisiones de parte del perredismo, exhiben dos posiciones de izquierda: la defensa de una de las últimas propiedades del estado (envuelta en un discurso nacionalista propio de la mejor época del priísmo) y la convocatoria a métodos de participación colectivos y de democracia directa.

Todas estas posturas no son inflexibles. Los principios ideológicos perredistas son maleables, en aras de sumar el mayor número de apoyos y con el fin de ganar y mantener más espacios de poder. El debate ideológico al interior del partido es limitado, como consecuencia de su orientación electoral.

El cumplimiento de un conjunto de políticas sociales con enfoque universal y la transferencia de recursos o bienes directamente a sectores importantes de la población fue piedra de toque del gobierno del PRD en la capital del país. Este rasgo distintivo fue novedoso en su momento y emulado por el PRI o el PAN poco después. Sin un programa de gobierno con fuerte identidad ideológica, pero con ideas sobre el fortalecimiento de la democracia y la reorientación del desarrollo económico en el ámbito local, los nuevos gobernantes trazaron sus propias coordenadas para imprimir su sello ideológico al cambio político en el DF.

El programa de gobierno en materia de política social se basó en una política de transferencias directas de beneficios económicos o en especie a los capitalinos. Tal política contravenía las medidas neoliberales de reducción del compromiso social del estado y del libre juego de las fuerzas del mercado como motores de la economía (nacional e internacional). Los perredistas decretaron políticas divergentes que fueron conformando un programa de gobierno donde prevaleció el universalismo en vez del asistencialismo, la canalización de recursos para satisfacer las necesidades inmediatas de sectores sociales amplios y un manejo eficaz de los recursos gubernamentales, sin someterse a las directrices marcadas por el gobierno federal y por las instituciones financieras internacionales. Hubo

avances en relación con la igualdad social y las libertades políticas, pero quedaron pendientes el respeto al estado de derecho, la rendición de cuentas y una mayor capacidad del gobierno para responder a las demandas sociales. La participación ciudadana no fue promovida como se esperaba y como los mismos perredistas plantearon al principio, lo que sin duda es una debilidad de un gobierno democrático y de izquierda.

#### **Fuentes consultadas:**

- ARELLANO TOLEDO, Marco (2013), “El PRI en la ALDF: el agotamiento del partido dominante”, en: Autor, (coord.), *El trabajo parlamentario de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal*, México, UNAM-Plaza y Valdés, pp.188-219.
- AUTOR(coord.) (2011), *Partidos políticos en el Distrito Federal: avances, estancamientos y retrocesos*, México, UNAM-Gernika, 495 p.
- AUTOR (2013), “El partido mayoritario: el Jefe de Gobierno y el PRD”, en: Autor (coord.), *El trabajo parlamentario de los partidos en la Asamblea Legislativa del DF*, México, UNAM-Plaza y Valdés. Pp. 29-92.
- AUTOR (2016), *Saldo de la democracia. Los gobiernos del PRD en el DF*, México, UNAM-Gernika.
- BARTOLINI, Stefano y Peter MAIR (2001), “Challenges to Contemporary Political Parties”, en: DIAMOND, Larry y Richard GUNTHER (eds.), *Political Parties and Democracy*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, pp. 327-344.
- BOBBIO, Norberto (1996), “La izquierda y sus dudas”, en BOSETTI, Giancarlo (comp.), *Izquierda punto cero*, México, Paidós.
- BOLÍVAR, Rosendo (2005), *El Partido de la Revolución Democrática. Antecedentes, nacimiento, conformación, desarrollo y problemas para la institucionalización de la izquierda partidaria mexicana*, México, IPN.
- BRUHN, Kathleen (2013), “El PRD y los movimientos populares en el Distrito Federal”, en: CADENA ROA, Jorge y Miguel Armando LÓPEZ LEYVA (coords.), *El PRD: orígenes, itinerarios, retos*, México IIS-CEIICH-UNAM-Ficticia, pp. 133-154.

- CALVILLO, Miriam, Alejandro FAVELA y Pablo MARTÍNEZ (2002), “Las políticas de combate a la inseguridad pública en el DF: 1997-2000”, en: *Polis*, México, UAM Iztapalapa, pp. 69-138.
- CARRIÓN, Fernando (2015), *El giro a la izquierda: los gobiernos locales de América Latina*, México, 5ª Avenida Editores, 2ª reimpresión, 467 p.
- CORTÉZ SALINAS, Josafat (2011), “Los partidos minoritarios en el DF: el caso del PVEM”, en: Autor (coord.), *Partidos políticos en el Distrito Federal: avances, estancamientos y retrocesos*, México, UNAM-Gernika, pp. 315-348.
- ESPEJEL, Alberto y Jorge Gerardo FLORES (2013), “Los partidos políticos minoritarios en la ALDF (1997-2009): desempeño legislativo y sello ideológico-pragmático”, en: Autor (coord.), *El trabajo parlamentario de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal*, México, UNAM-Plaza y Valdés, pp. 225-272.
- ESTATUTO DE GOBIERNO <http://www.aldf.gob.mx/archivo-30b57dbe14acddeed41ee892a4be4522.pdf>
- GALLEGO, Ferrán (1998), “Populismo latinoamericano”, en: MELLÓN, Joan Antón (ed.), *Ideologías y movimientos políticos contemporáneos*, Madrid, Tecnos, pp. 168-169.
- HERNÁNDEZ VICENCIO, Tania (2011), “El Partido Acción Nacional en la lucha por la no despenalización del aborto en el Distrito Federal”, en: *Andamios*, México UACM, Vol. 8, Núm. 15, enero-abril, 2011, 367-398. <http://www.redalyc.org/pdf/628/62819892015.pdf>
- LAJOUS, Andrés (2012), “Andrés Manuel López Obrador. Y la máquina seguía...”, en: *Nexos*, México, número 414, junio de 2012, p. 41-49. <http://www.nexos.com.mx/?p=14838>
- LANDER, Edgardo (2006), “Izquierda y populismo: alternativas al neoliberalismo en Venezuela”, en: RODRÍGUEZ GARAVITO, César A., Patrick S. BARRETT, y Daniel CHÁVEZ (eds.), *La nueva izquierda en América Latina. Sus orígenes y trayectoria futura*, Bogotá, Norma, 2006.
- MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Víctor Hugo (2004), *Fisiones y fusiones, divorcios y reconciliaciones. Las corrientes del PRD, 1989-2004*, México, Plaza y Valdés.

- MORLINO, Leonardo (2004), *Democracias y democratizaciones*, México, CEPCOM.
- MORLINO, Leonardo (2012), “Observando las diferentes cualidades de la democracia”, en: *Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública*, México, Universidad de Guanajuato, vol. 1, núm. 1, enero-junio, pp. 9-50.  
<http://www.remap.ugto.mx/index.php/remap/article/view/2/2>
- PANEBIANCO, Angelo (1990), *Modelos de partido*, Madrid, Alianza Editorial.
- PETRAS, James (2000), *La izquierda contraataca. Conflicto de clases en América Latina en la era del neoliberalismo*, Madrid, Akal
- PICÓ, Josep (1992), *Los límites de la socialdemocracia europea*, Madrid, siglo XXI.
- REGALADO, Roberto (coord.) (2012), *La izquierda latinoamericana a 20 años del derrumbe de la Unión Soviética*, México, Ocean Sur, 407 p.
- REGALADO, Roberto (coord.) (2012a), *La izquierda latinoamericana en el gobierno: ¿alternativa o reciclaje?*, México, Ocean Sur, 259 p.
- RODRÍGUEZ GARAVITO, César A. y Patrick S. BARRETT (2006), “¿La utopía revivida? Introducción al estudio de la nueva izquierda latinoamericana, en: RODRÍGUEZ GARAVITO, César A., Patrick S. BARRETT, y Daniel CHÁVEZ (eds.), *La nueva izquierda en América Latina. Sus orígenes y trayectoria futura*, Bogotá, Norma, 2006, p. 15-66.
- ROMERO ESCALANTE, Rafael Adrián (2014), *Las causas estructurales que originaron el conflicto de la despenalización del aborto en la ciudad de México en el 2007*, México, FCPS-UNAM, tesis de licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública.  
<http://132.248.9.195/ptd2014/agosto/306196326/Index.html>
- RAMÍREZ, Cynthia (2012), “Andrés Manuel López Obrador: la movilización permanente”, en: *Letras libres*, México, número 162, junio, p. 26-31.  
<http://www.letraslibres.com/mexico/politica/andres-manuel-lopez-obrador-la-movilizacion-permanente>
- SOTELO, Ignacio (1998), “Socialismo”, en: MELLÓN, Joan Antón (ed.), *Ideologías y movimientos políticos contemporáneos*, Madrid, Tecnos, p. 253-274.

- TEJERA GAONA, Héctor (2015) *Participación ciudadana y estructura política en la Ciudad de México*, México, UAM-Gedisa, 242 p.
- TEJERA GAONA, Héctor (2016), “*La gente no sabe por quién vota; tiene que hacerlo así, porque así se hace*’. *Estructura política, identificaciones clientelares y procesos electorales en la Ciudad de México*, México, UAM-Gedisa, 188 p.
- VIVERO, Igor (2006), *Desafiando al sistema. La izquierda política en México*, México, 368 p.
- WOLDENBERG, José (1997), “Los extravíos de la izquierda”, entrevistas de ATTILI, Antonella, *La política y la izquierda de fin de siglo*, México, Cal y Arena
- ZICCARDI, Alicia, Isabel VÁZQUEZ y Arturo MIER Y TERÁN (2012), “Pobreza urbana, segregación residencial y espacio público en la ciudad de México”, en: ZICCARDI, Alicia (coord.), *Ciudades del 2010: entre la sociedad del conocimiento y la desigualdad social*, México, UNAM, pp. 689-724